

Santiago, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció don MANUEL FILEMÓN PIZARRO BASCUR, cédula de identidad N° 10.452.063-4, operario electromecánico, domiciliado en Río Maule N° 2979 de la comuna de Lampa, quien interpuso demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en contra de EMPRESA ELABORADORA DE ALIMENTOS FRUTALE LIMITADA, RUT N° 79.746.250-0, del giro panadería y elaboración de masas, cuyo domicilio se encuentra en calle Lautaro N° 361 de la comuna de Quilicura.

Al efecto, indicó que inició relación laboral con la demandada el 7 de junio de 2017, en calidad de electromecánico de mantención, y tuvo un accidente del trabajo el día 8 de septiembre de 2018, explicando que le correspondía desempeñarse como electromecánico de la sección “quipan”, pero ese día no asistieron a trabajar el mecánico Ricardo Sepúlveda y el técnico de mantención Alex Farías, por lo que en las primeras horas de la mañana su jefe directo, don José Morales, lo llamó y le indicó que, atendido que estos compañeros no asistirían a trabajar, debía cubrir su turno en las otras secciones de la planta.

Luego, esta misma jefatura le habría ordenado realizar una tarea en el exterior de la empresa, consistente en cambiar 30 filtros de los equipos de aire acondicionado que se encuentran en el techo de la empresa, señalándole que los filtros nuevos estaban en la bodega y debía trasladarlos hasta el techo, pues el cambio se haría el día siguiente (domingo), agregando que él mismo lo acompañaría en el recambio de los mencionados filtros.

Así, comenzó a subir los filtros para dejarlos junto a los equipos de aire acondicionado donde se debían cambiar, precisando que caminar por el techo era complejo pues el espacio era muy reducido ya que había una pasarela angosta y escalerillas de 15 × 100 centímetros, sin tapas laterales ni pasamanos o respaldos. Fue así como, en el tercer viaje, pisó en el vacío entre la pasarela y el equipo de aire acondicionado con su pie derecho, por lo que sólo se quedó apoyado en el pie izquierdo, el cual se torcionó, trabándose, experimentando un dolor muy fuerte. En un principio, creyó que



se había esguinzado el pie izquierdo y se dirigió a su puesto de trabajo, pero su expresión de dolor hizo que un compañero de labores llamara a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para que le enviaran una ambulancia, siendo trasladado al Hospital del Trabajador, lugar en que se le diagnosticó una fractura de huesos del pie de la que fue intervenido quirúrgicamente el día 13 de septiembre siguiente, debiendo quedarse en recuperación varios días y luego lo enviaron a su casa para guardar reposo, pues su recuperación duraría entre tres y cuatro meses.

Por otra parte, relató que el 18 de noviembre del año 2018 se dio cuenta que no le habían depositado el sueldo quincenal y el lunes 19 siguiente llamó a la ACHS para averiguar lo que había pasado, ocasión en que le informaron que no era considerado paciente de la Ley N° 16744 y que debía atenderse en FONASA. Por tal razón, el 20 de noviembre de 2018 se trasladó a la oficina de la ACHS de Quilicura, donde le indicaron que ya no pagarían sus licencias y lo enviarían al COMPIN por el rechazo. Al día siguiente, acompañado de su esposa, se habría dirigido a la empresa y hablado con don Ricardo Hafon, quien dijo desconocer el rechazo del accidente del trabajo por la Asociación Chilena de Seguridad, elucubrando que la empresa había sido quien presionó al organismo administrador para despojarlo de sus derechos legales para la atención de salud, entendiendo que ello era así pues ésta no remitía los antecedentes necesarios para que se le pagaran las licencias a la Caja Los Andes.

Atendida su separación de la cobertura de la Asociación Chilena de Seguridad, recurrió ante la superintendencia respectiva, quien solicitó los antecedentes y concluyó que se había actuado arbitrariamente, sin investigar su caso, perjudicando su recuperación y tratamiento médico conforme a la ley N° 16.744. Con copia de la resolución en mano se dirigió personalmente a la ACHS para solicitar su reintegro al tratamiento, ocasión en que los profesionales de dicho organismo concluyeron que su pie izquierdo no estaba bien y debía operarse nuevamente. Esta situación le habría generado problemas psicológicos y psiquiátricos respecto de los cuales sigue en tratamiento a la fecha de interposición de la demanda.

En lo relativo al accidente propiamente tal, señaló que no había supervisor en las cercanías de la faena (techo de la empresa),



encontrándose solo y debiendo bajar por las suyas, denunciando que no hubo charlas de inducción previas a la jornada de trabajo ni se le hizo presente la peligrosidad del lugar por donde debía transitar para efectuar la tarea ordenada, añadiendo que tampoco existía señalética de peligro en dicho lugar. Hizo presente que, al momento del accidente, tampoco había ningún supervisor de seguridad experto en prevención de riesgos ni integrante del comité paritario en el lugar de los hechos y que en toda esta acción no se tomó en cuenta por la demandada las medidas de coordinación y seguridad necesarias para que se realizara la tarea sin riesgo de sufrir accidentes.

En cuanto a las causas del accidente, indicó que no había registro de evaluación de riesgos previo al inicio de trabajos en altura; que faltaba procedimiento de trabajo seguro para dicha actividad, así como elementos de protección personal para realizar trabajo en altura; sin conocimiento de un camino estable en altura para el tránsito de trabajadores, pues caminaba por escalerillas que –ahora– señala eran de 30 X 100 centímetros y la pasarela no contaba con barrera de protección para evitar caídas; ni existía en el lugar alguna señal de advertencia de riesgo de atrapamiento de pies, caídas de altura o suelo inestable. Por último, indicó que no se le informaron los riesgos laborales según obliga el Decreto Supremo N° 50.

Sobre el diagnóstico de su lesión, señaló que correspondía a una luxofractura de lisfranc cerrada, con secuelas de rigidez de medio-pie izquierdo y dolor crónico térmico, por lo que debe usar una bota, agregando que la recuperación ha sido lenta y que aún sufre dolores intensos y las secuelas le han resultado invalidantes. Añadió que, con fecha 26 de diciembre de 2019, la comisión evaluadora de incapacidad le otorgó un 15% de pérdida de ganancia y que actualmente sigue en terapia por el dolor crónico, así como en tratamiento psiquiátrico y psicológico derivado del accidente, pues ya no existe la alegría y el buen entorno familiar del cual se enorgullecía hasta antes del accidente laboral, fecha en la que contaba con 52 años.

Indicó haber sido víctima de un perjuicio de sufrimiento, de un perjuicio de agrado y de un perjuicio estético. Sobre el primero, refirió los dolorosos tratamientos que ha debido seguir hasta la fecha y el daño



psicológico experimentado (estrés post-traumático y síndrome depresivo reactivo) que lo tiene con una fuerte neurosis y angustia. Respecto al perjuicio estético, indicó que aparece frente a sus semejantes como un minusválido físico y mental, con una cojera permanente y una bota ortopédica visible. Finalmente, en cuanto al perjuicio de agrado señaló que se le ha privado de las satisfacciones diversa del orden social, mundano y de entretenición que normalmente benefician a una persona de su edad y condición cultural y social, ya que no sale de su casa y que el accidente implicó la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, por ejemplo, hacer ejercicio, ir a la feria o comprar el pan a diario con sus hijos pequeños.

En cuanto al derecho, señaló que la demandada incumplió su obligación legal y contractual de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, reiterando las condiciones inseguras en que hubo de desarrollar la labor ordenada. Este incumplimiento del artículo 184 aparecería como causa directa y necesaria de las lesiones que se le causaron a raíz del accidente laboral ya relatado, toda vez que el empleador le obligó a trabajar en lugares y faenas peligrosas, privándole de desarrollar su labor contractuales en forma segura, por lo cual los perjuicios causados corresponde que sean resarcidos por la demandada.

En relación con la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador, aludió a los artículos 66, 67, y 68 de la ley N° 16744, cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 40 de 1969, conocido como reglamento de prevención de riesgos, de lo que resulta indudable que existen normas específicas de prevención que no se han cumplido así como tampoco las relativas a la capacitación e información de riesgos a los trabajadores, sin especificar ninguna.

Luego citó los artículos 1556 y 1547 del Código Civil, concluyendo que la obligación incumplida por la demandada tiene carácter contractual y que debe responder de la culpa levísima, sosteniendo que la empleadora no tomó las medidas eficaces de protección en su caso, pues se accidentó porque se le obligó a desempeñarse –sin protección de ninguna especie– en labores y en lugares muy peligrosos.



También refirió la infracción de normas laborales y de seguridad social más específicas, en particular la infracción de los artículos 3, 11 acápite primero, 36, 37 inciso primero y 53 acápite primero del Decreto Supremo N° 594 de 1999 que aprobó el “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”, indicando que estas normas obligan a las empresas a suprimir los factores de peligro que puedan afectar la salud e integridad de los trabajadores, denunciando que la empresa no tenía supervisor ni experto en prevención de riesgos que se preocuparan de dar cumplimiento a dicha normativa, ni tampoco se le prestaron los implementos de seguridad idóneos. Agregó la infracción del artículo 187 del Código del Trabajo y el artículo 68 de la ley N° 16744, al exigirle el desempeño de un trabajo en faenas que pueden comprometer su salud y seguridad, y –finalmente– porque no se le informaron los riesgos laborales de la tarea a realizar, no había comité paritario que le instruyera los peligros a los que se enfrentaba, ni contaba con un espacio de trabajo con la adecuada señalética.

En cuanto a la indemnización solicitada, señaló en primer lugar el lucro cesante, citando los artículos 1556 y 1557 del Código Civil, fundado en las limitaciones físicas y psicológicas irreversibles con que lo ha dejado el accidente, por lo que se le hace muy difícil retomar en el futuro “*su actividad operaría agrícola*” (*sic*), ni ninguna otra relacionada, por lo que ha visto sus posibilidades de trabajo disminuidas. Por tales razones, demandó por dicho concepto la suma de \$40.000.000, que no representan su última remuneración proyectada hasta que cumpla 65 años de edad, sino toda aquella pérdida futura que representan los daños físicos y limitaciones por no poder realizar su trabajo y padecer estrés post-traumático y depresión.

También solicitó la indemnización del daño moral, entendido como toda lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación, como lo es la diferencia perjudicial de que –a sus 52 años– se encontraba sano física y psicológicamente y –luego del accidente laboral– carga con las consecuencias de las múltiples cirugías por su fractura que le han dejado una cojera visible y una disminución de su movilidad de por vida, ya que le impiden desempeñarse adecuadamente en cualquier trabajo en que deba permanecer de pie, como son sus labores de electro-mecánico, que por lo



demás es la única actividad que ha desarrollado. Por consiguiente, demanda la cifra de \$60.000.000 por concepto de daño moral.

Por estas consideraciones y previas citas legales, solicitó acoger en todas sus partes la demanda y condenar a la demandada a pagarle las siguientes sumas:

- 1.- \$40.000.000 por lucro cesante.
- 2.- \$60.000.000 por daño moral.
- 3.- Reajustes, intereses y costas.

SEGUNDO: Que, contestando la demanda, se controvirtieron expresamente los hechos señalados en el libelo, aunque se aclaró que el demandante se desempeñó como electromecánico entre el 7 de junio de 2017 y el 8 de enero 2020, concluyendo la relación laboral por necesidades de la empresa. También reconoció que el día 8 de septiembre el 2018 el actor sufrió un accidente en dependencias de la empresa mientras cumplía sus funciones.

Por otro lado negó la dinámica del accidente relatada en la demanda, pues no existiría relación causal entre el pie lesionado y el pie del accidente, conforme resolvió la Asociación Chilena de Seguridad mediante resolución de fecha 7 de noviembre de 2018. Añadió que ninguna incidencia, injerencia o responsabilidad puede reprochársele respecto de dicha declaración que privó al demandante de cobertura y tratamiento, así como de las perniciosas consecuencias que invoca. Finalmente, indicó que la remuneración percibida por el actor ascendía a \$1.042.789 y negó que para ejecutar el traslado de los filtros de aire se requiriese supervisión ya que la tarea era baladí y corriente, precisando que la función encargada al actor era exclusivamente trasladar los filtros desde la bodega al sector del techo en que se encontraban los equipos de aire acondicionado.

Consideró relevante consignar que el área de mantención se dividía en 3 secciones sólo para efectos de organización, lo cual no era impedimento para que cada electromecánico pudiese desempeñarse indistintamente en cualquiera de las secciones. En ese contexto fue que el 8 de Septiembre de 2018 el jefe directo del actor, don José Morales, le solicitó



el traslado de filtros de aire acondicionado desde la bodega hasta el techo de la planta, para que los fuera dejando al costado de dichos equipos, pues se instalarían al día siguiente entre 2 personas.

En suma, lo único que debía hacer el actor era trasladar desde un punto a otro los paquetes con filtros, cuyo peso aproximado es de 4.5 kilos cada uno, para lo cual debía transitar por una pasarela de aproximadamente 80 centímetros ubicada en el techo de la planta, haciendo hincapié en el hecho que para ejecutar tal tarea no se requería una especial inducción ya que no requiere competencias especiales, ni capacitación o supervisión, aunque resalta que lo más relevante es que su jefatura directa coordinó apropiadamente la ejecución de la labor –explicándosela– tal como lo reconoce el propio demandante en el libelo.

En cuanto a la dinámica del accidente relatada en la demanda, se pregunta cómo es que –habiendo pisado un supuesto espacio vacío entre la pasarela y el equipo de aire acondicionado con su pie derecho– el actor se *torsione* (sic) su pie izquierdo. Luego describe, acompañando una fotografía del lugar en que se habría producido el accidente, que la pasarela tiene 80 centímetros de ancho pues está integrada por 3 rejillas de 26 centímetros cada una, y que –contrario a lo señalado en el libelo– entre las rejillas del piso y los equipos de aire acondicionado no media espacio alguno.

Por otra parte, indicó que debe distinguirse la lesión sufrida de lo que ocurrió con posterioridad al 7 de noviembre de 2018, ocasión en que el accidente fue calificado como exento de cobertura de la ley N° 16744. Al efecto, indicó que el trabajador ingresó a pabellón el 13 de septiembre de 2018 y –según da cuenta el informe médico– evolucionó en forma favorable, en tanto el re-ingreso se produjo recién el 25 de febrero el 2009, siendo el propio actor quien reconoce que mientras se encontraba convaleciente de una operación en su pie, sin tratamiento ni rehabilitación, se trasladaba y movilizaba, lo que afectó ciertamente sus posibilidades de recuperación.

Por otro lado, enumeró las medidas de seguridad adoptadas por su parte, indicando lo siguiente: i) que el actor contaba con zapatos de seguridad; ii) que previo al traslado de los filtros coordinó la tarea con su jefatura directa; iii) que al iniciarse la relación laboral el actor recibió



inducción y derecho saber; iv) que sus trabajadores cuentan con Reglamento Interno y capacitaciones idóneas; v) que el actor participó y aprobó con nota 6 el curso de prevención de riesgos eléctricos impartido por la Asociación Chilena de Seguridad en junio del 2018; vi) que el Comité Paritario de la empresa se reúne mensualmente firmando las actas respectivas; y vii) que el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa está dirigido por un experto debidamente certificado.

Respecto al daño moral, postuló que las lesiones que acusa al actor no tienen la aptitud de impedirle el trabajo remunerado dado que fue dado de alta laboral el 25 de diciembre de 2019 y se reincorporó en completa normalidad a sus funciones, existiendo más razones para pensar que la pretensión de indemnización obedece únicamente a un ánimo de lucro, ya que los hechos no justifican un daño extra-patrimonial, el que por lo demás deberá acreditarse, y menos la desmesurada cuantía que se pretende. Luego volvió a alegar la inexistencia del nexo causal entre el daño reclamado y algún hecho imputable a su parte, indicando que no ha incurrido en culpa o dolo, pues el accidente se produjo por una exposición imprudente al riesgo por parte del propio demandante, siendo ésta la única causa directa accidente, lo cual la exonera de cualquier responsabilidad.

Respecto al lucro cesante demandado, hizo presente que el trabajador siguió cumpliendo funciones y recibiendo remuneración una vez re-incorporado, y antes de eso percibió los subsidios respectivos, por lo que no existiría ninguna pérdida de ganancia que lo habilite a exigir esta reparación, precisando que dicho ítem indemnizatorio requiere ser real y cierto, no eventual ni hipotético. Además, hizo presente que el cálculo efectuado en la demanda es completamente antojadizo.

Previas citas legales, pidió tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes; y –en subsidio– reducir el monto de la indemnización al mínimo legal.

TERCERO: Que, en audiencia preparatoria llevada cabo el 6 de julio de 2020, se efectuó el llamado a conciliación del tribunal, sin que ésta se alcanzara, procediendo a decretar como no controvertidos los siguientes hechos:



1) Que el actor se desempeñó como Electromecánico para Frutale entre el 7 de junio de 2017 y el 8 de enero de 2020, concluyendo la relación laboral por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo.

2) Que el día 8 de septiembre de 2018, el actor sufrió un accidente en dependencias de la empresa mientras cumplía sus funciones.

Finalmente, en dicha oportunidad se fijaron los siguientes hechos controvertidos:

1) Motivos, causas y circunstancias que produjeron el accidente sufrido y funciones específicas que estaba desarrollando el trabajador ese día.

2) Medidas adoptadas por la demandada para protección y seguridad de sus trabajadores, en especial en relación a los trabajos realizados el día 8 de septiembre de 2018.

3) Naturaleza, características y monto de los daños sufridos, a raíz del accidente en cuestión.

CUARTO: Que, en audiencia de juicio llevada a cabo los días 12 de enero y 23 de marzo de 2021, la parte demandante incorporó los siguientes medios de prueba en abono de sus afirmaciones:

Documental:

1) Liquidación de remuneraciones del actor del mes de septiembre de 2018.

2) Set de 5 fotografías del lugar actual donde ocurrió el accidente del actor en las dependencias de la demandada.

3) Set de 2 fotografías de Rx del pie izquierdo lesionado del actor.

4) Set de 2 fotografías del pie izquierdo operado del actor.

5) Certificado ACHS de Terminó Reposo Laboral del actor.

6) Ord.1536 de 07.02.2019 de la Superintendencia de Seguridad que califica su accidente laboral para atención médica por Ley 16.744.



7) Ficha medica parcial de atenciones médicas del actor por accidente del trabajo de fecha 08.09.2018 en ACHS.

8) 22 imágenes Rx y TAC del pie izquierdo del actor.

9) Certificado de concurrencia y orden de Interconsulta Externa Psiquiatra ACHS del actor de fecha 08.03.2019.

Confesional: Absolvió posiciones don Cristóbal Castaño Fueyo, en su calidad de representante legal de la demandada, según se dejó constancia en registro de audio.

Testimonial: Declararon, conforme se registro en audio, los siguientes testigos:

- 1) Maria Eugenia Barrera, cédula de identidad N° 11.849.207-2.
- 2) Manuel Alejandro Pizarro, cédula de identidad N° 19.037.983-3.
- 3) Carlos Pizarro Bascur, cédula de identidad N° 10.848.012-2.

Oficios:

1) ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (N° F.3505.2020 de 30 de diciembre de 2020) que remitió respecto del actor su ficha clínica del actor; la resolución exenta N° 114199, de 9 de noviembre de 2020, de la Superintendencia de seguridad Social; la denuncia individual de accidente del trabajo; un informe de antecedentes médicos; informe técnico para calificación de accidentes; medicamentos recetados, y resolución N° 20200552, de fecha 16 de junio 2020, de la Comisión Médica de Reclamos.

2) SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA (N° 126 de 11 de enero de 2021) que informó que no fue posible encontrar registro alguno del accidente de autos.

3) DIRECCIÓN DEL TRABAJO (sin número) indicando que el accidente de autos no fue informado a dicha entidad.

4) SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (N° 4039 de 23 de diciembre de 2020) que remitió copia del expediente N° 44406-2018 correspondiente al caso del demandante.



Exhibición de documentos: La parte demandante tuvo por cumplida la diligencia en lo relativo a la DIAT del accidente laboral de autos; en tanto sobre la capacitación de trabajo en altura en el exterior del edificio de la empresa, y la capacitación y manejo sus equipos de aire acondicionado, ambos firmados por el trabajador, nada solicitó ante su falta de exhibición.

QUINTO: A su turno, la parte demandada allegó la siguiente evidencia a fin de probar sus asertos:

Documental:

- 1) Contrato de trabajo suscrito el 7 de junio de 2017.
- 2) Anexo de contrato bono gestión, suscrito 7 junio 2017.
- 3) Liquidaciones de remuneraciones de junio, julio y agosto 2018.
- 4) Declaración del Jefe del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, tras visita al trabajador de fecha 13 de septiembre de 2018.
- 5) Declaración del Trabajador relativa al accidente, tomada en su domicilio, de fecha 10 de septiembre de 2018.
- 6) Registro de asistencia agosto y septiembre de 2018.
- 7) Reglamento interno de orden higiene y seguridad junto a su respectivo comprobante de recepción de fecha 3 de julio 2017.
- 8) Denuncia individual de accidente de trabajo.
- 9) Comprobante de recepción de la obligación de informar de fecha 6 de junio 2017.
- 10) Certificado emanado de ACHS, derivación a sistema previsional común de fecha 7 de noviembre de 2018.
- 11) Certificado emanado de ACHS, término de reposo laboral de fecha 20 de diciembre de 2019.
- 12) Actas del Comité Paritario entre diciembre 2017 y diciembre 2018.
- 13) Informe médico de fecha 9 de marzo de 2020, emanado de ACHS.



14) Capacitación en materia de riesgos eléctricos impartida por ACHS, de fecha 27 de junio 2018.

15) Tres fotografías a color, una corresponde a lesión en pierna derecha, otra muestra operario con paquete de filtro aire acondicionado en sus manos, y la tercera ilustra respecto a medidas de la pasarela en que ocurre el accidente.

Confesional: Absolvió posiciones el demandante, tal como se registró en audio.

Testimonial: Depusieron los siguientes testigos, según consta en registro de audio:

1) José Morales Galaz, cédula de identidad N° 14.331.112-0.

2) Ricardo Hafon Mak, cédula de identidad N° 12.584.654-8.

Oficio: **SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (N° 4039 de 23 de diciembre de 2020)** que remitió copia del expediente N° 44406-2018 correspondiente al caso del demandante.

Otros medios de prueba: 4 archivos de video que recrean la dinámica del accidente.

SEXTO: Que, para una adecuada resolución del asunto controvertido, es necesario hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 16744 que dispone lo siguiente: *“Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”* Asimismo, la citada ley previene en su artículo 69 que *“Cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero (...) b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones de derecho común, incluso el daño moral”*.

Por otra parte, el artículo 184 del Código del Trabajo refiere que *“El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los*



posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales". La disposición citada introduce como obligación esencial del contrato de trabajo, en lo que atañe a las cargas del empleador, la obligación de seguridad, que se resume en que éste debe adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar que en el lugar de trabajo, o con ocasión de él, se produzca un accidente que afecte la vida, la integridad física o psíquica, o la salud del trabajador.

El incumplimiento de la sociedad demandada como empleadora se presentará cuando ocurra un accidente del trabajo, ya sea porque no se habían adoptado las medidas necesarias de seguridad o porque las adoptadas no eran eficaces, surgiendo el deber de reparación como consecuencia de la obligación que el empleador asume al celebrar el contrato de trabajo. Así, formando la obligación de seguridad parte integrante del contrato de trabajo, su infracción determina, consecuentemente, la responsabilidad contractual del empleador.

De lo anterior es posible concluir que –para que la aludida responsabilidad tenga lugar– deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: i) que se haya producido un accidente del trabajo; ii) que dicho accidente sea imputable a dolo o culpa del empleador, esto es, que se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de seguridad y al deber de protección; y iii) que el accidente le haya ocasionado perjuicios al trabajador.

SÉPTIMO: Que, en relación el primer elemento, la demandada controvertió que, con fecha 11 de septiembre de 2019, el actor haya sufrido un accidente del trabajo, pues así lo concluyó el organismo administrador del seguro de la ley N° 16744.

De la prueba rendida (oficios Asociación Chilena de Seguridad y Superintendencia de Seguridad Social) consta que, sin perjuicio de ser efectivo lo alegado por la demandada, lo cierto es que dicha decisión fue apelada por el actor ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual resolvió el carácter laboral del accidente mediante Ord. N° 1536 de fecha 7 de febrero de 2019, por lo que deberá estarse al criterio técnico expresado,



rechazándose en consecuencia las alegaciones de la demandada destinadas a cuestionar el carácter del accidente sufrido por el actor.

OCTAVO: Que, el segundo presupuesto está dado porque dicho accidente pueda ser imputable a título de dolo o culpa al empleador, esto es, que se deba al incumplimiento por parte de éste de su obligación legal de seguridad y al deber de protección, para lo cual se requiere establecer las circunstancias y causalidad del accidente sufrido por el actor. Al efecto, la prueba rendida da cuenta de los siguientes hechos acreditados:

- a) Que, conforme con la denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT) allegada por la demandada y obtenida mediante los oficios referidos en el motivo anterior, éste se produjo mientras el actor trasladaba filtros de aire (acondicionado) al techo de la empresa, lugar en que sufre caída a nivel, lesionándose el pie izquierdo. El accidente ocurrió el 8 de septiembre de 2018 a las 10:50 horas y no hubo testigos.
- b) A mayor abundamiento, en su Ord. N° 1536 de 7 de febrero de 2019, la Superintendencia de Seguridad Social concluye la verosimilitud del relato señalado por el actor en la DIAT, ya que sus profesionales estimaron una relación directa del mecanismo lesional y el diagnóstico, tomando en consideración las condiciones inseguras del lugar en que ocurrió el accidente; así como de la imposibilidad que la lesión se haya producido antes que ingresara el actor a trabajar el día 8 de septiembre de 2018, pues la gravedad de la lesión le habría impedido realizar sus funciones habituales.
- c) El propio actor reconoció al absolver posiciones que contaba con todos los implementos de seguridad al momento de accidentarse, que la tarea se la ordenó su jefe don José Morales, que los filtros que transportaba en cada viaje le tapaban la visión para caminar, que entre la pasarela y el techo de la empresa había un espacio aproximado de medio metro y que los dedos de su pie izquierdo se engancharon al caer hacia su lado derecho. Los dos últimos elementos de su declaración guardan perfecta armonía con las



fotografías del lugar del accidente allegadas por ambas partes y mediante oficio ACHS, pues aparece que el piso de la pasarela está a dicha distancia aproximada y lo conforman por 2 hileras de rejillas, elemento en que perfectamente pudieron engancharse los dedos del pie del actor que permaneció apoyado (izquierdo) mientras el cuerpo de éste caía hacia el otro costado algunos centímetros.

- d) Además, dichas fotografías dan cuenta que no existía una baranda al lado derecho de la pasarela, en tanto a su lado izquierdo se encontraban los equipos de aire acondicionado, sin que mediara espacio entre éstos y la hilera de rejilla que formaba parte del piso de la pasarela. Tampoco consta en dicha evidencia alguna advertencia de peligro de atrapamiento respecto de las rejillas que conforman el piso de la pasarela.
- e) Que, se incorporó contrato de trabajo del demandante, de fecha 7 de junio de 2019, constando que se obligó a desempeñar personalmente el cargo de “electromecánico” en las dependencias de la empresa ubicadas en calle Lautaro N° 361, Quilicura.

Sobre la distribución de las funciones del cargo señalado en las distintas áreas de operación, el testigo de la demandada señor Morales (jefe directo del actor) indicó que cualquier “electromecánico” podía ser asignado a cualquiera de dichas áreas.

Por lo demás, no hay controversia entre las partes respecto a la tarea asignada (traslado de filtros desde la bodega hasta el techo de la planta), la cual –en opinión del tribunal– no requería ninguna calificación especial.

- f) Que, en este contexto, la demandada incorporó evidencia documental relativa al cumplimiento de la obligación de informar riesgos laborales y la entrega del Reglamento Interno al demandante (instrumental números 7 y 9), la realización de sesiones mensuales del comité paritario entre diciembre del año 2018 y el mismo mes del año 2019 (documento N° 12), y que el



actor participó en curso de capacitación sobre riesgos eléctricos impartida por ACHS (documento N° 14).

De esta manera, de relacionar los antecedentes expuestos, es posible establecer que el accidente ocurrió en circunstancias que el demandante trasladaba, en solitario y sin supervisión alguna, filtros de aire acondicionado desde la bodega hasta el techo de la empresa, lugar en que debía desplazarse por una pasarela cuyo piso estaba compuesto por 2 hileras de rejilla metálica, pasarela que no tenía baranda ni señalética de peligro de atrapamiento de extremidades, cuando en uno de sus viajes intentó apoyar su pie derecho fuera del área de la pasarela (vacío) producto que la carga que transportaba le impidió visualizarlo, enganchándose su pie izquierdo en una rejilla metálica que formaba parte del piso.

En las anotadas circunstancias, para el tribunal es claro que la causa del accidente es la condición insegura en que el actor desarrollaba su labor, ya que la pasarela que debía transitar en el techo de la empresa no contaba con baranda ni señalética de peligro que le permitiera transitar con seguridad por ella. Dicha causalidad se concluye *ex post* del accidente por el hecho que la demandada pusiera una baranda en la pasarela referida, tal como refirieron en forma conteste sus testigos.

A lo anterior se agrega la falta de supervisión de la tarea por parte de la jefatura, pues el actor decidió trasladar varios paquetes de filtros al mismo tiempo, lo cual obstaculizaba su visión al momento de desplazarse, todo ello sin que exista evidencia que su jefatura reprimiera su proceder y dispusiera una forma segura de realizar dicho traslado.

En las condiciones anotadas, independiente de la simplicidad aparente de la tarea ordenada al actor y de los múltiples cumplimientos formales acreditados por la demandada respecto de su obligación de seguridad (reglamento interno, derecho a saber, capacitaciones y sesiones del comité paritario), lo cierto es que la demandada no probó haber actuado con la diligencia exigida ya que debía acreditar la existencia de medidas de seguridad específicas respecto del desplazamiento por la pasarela del techo de la empresa, carga que no fue satisfecha, pues lo único acreditado es la instrucción e trasladar filtros desde la bodega hasta el techo de la empresa,



mas no de alguna instrucción sobre la forma de realizarlo, algún reconocimiento del área que debía transitar ni menos algún tipo de supervisión mientras el actor ejecutaba la tarea encomendada.

Las consideraciones precedentes descartan que el accidente se deba a una conducta sub-estándar del trabajador, pues no existe evidencia relativa a que la demandada le haya indicado la forma segura de proceder, a pesar de haber declarado en estrados el señor José Morales, jefatura directa del actor y quien le ordenó realizar la tarea. Además, respecto al hecho que el demandado no haya realizado el reposo ordenado (hecho reconocido en la demanda), la evidencia rendida por la propia demandada da cuenta que ello se debió a que su accidente fue declarado no ley por ACHS, viéndose forzado a iniciar gestiones ante los organismos respectivos para obtener el pago de subsidios que –al igual que la remuneración– tienen naturaleza alimenticia y –por ende– lo pusieron en un estado de necesidad respecto del cual no pudo proceder de otra manera. En dichas condiciones, forzoso resulta concluir que no concurre la exposición imprudente al daño alegado por la demandada, pues –aunque fuese así– se trataría de una conducta que ni siquiera puede calificarse de voluntaria.

NOVENO: Que el actor solicita el resarcimiento del daño moral experimentado, pues ha debido soportar dolorosos tratamientos derivados de la lesión sufrida, así como el daño psicológico experimentado (perjuicio de sufrimiento); arrastrando una cojera que lo obliga a usar bota ortopédica (perjuicio estético) y porque las secuelas de su lesión le privan de las satisfacciones de orden social, mundano y de entretención que le corresponden a cualquier persona de su edad y condición.

Que, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia, es indemnizable y debe entenderse por daño moral todo sufrimiento, dolor o aflicción psicológica de quien se ha visto expuesto de manera directa a él, como es el caso del demandante. La evaluación del referido daño se encuentra entregada al criterio discrecional del juez que conoce de la causa y por ello tiene un carácter netamente subjetivo.

De la prueba rendida sobre el punto, se tiene por efectivo lo siguiente:



a) Que, para probar dicho padecimiento, se incorporó la ficha clínica del actor e informe de antecedentes médicos remitidos –vía oficio– por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), los que describen el derrotero que éste ha debido transitar como consecuencia del accidente de autos. Sobre el particular, consta que el actor tenía 52 años al ingresar a ACHS con fecha 8 de septiembre de 2018, diagnosticándosele luxofractura de lisfranc del pie izquierdo, siendo sometido a cirugía para reducción y osteosíntesis de dicha fractura, y –con posterioridad– se le mantuvo en rehabilitación ambulatoria y controles de traumatología y terapia física, evolucionando adecuadamente hasta noviembre de 2018, época en la que aún debía usar bota y bastones ortopédicos. A la fecha de reintegrarse a tratamiento por orden de SUSESO, en febrero de 2019, evidencia claudicación leve a la marcha y refiere poder caminar hasta 20 minutos y aumento de dolor (5/10) con tareas de mayor exigencia.

En abril de 2019 se pesquisa inestabilidad residual, por lo que es operado nuevamente el 19 de junio del mismo año, realizándose artrodesis del medio pie con grapas de Nitinol, con diagnóstico al alta hospitalaria de artrosis post-traumática mediopie izquierdo. Evolucionó favorablemente –sin perjuicio de prescribírselo uso temporal de bota y bastones nuevamente– en consolidación y logrando marcha en punta de pies sin dificultad ni claudicación, sin dolor y con cicatrices en buenas condiciones, por lo cual se dispuso su alta de ACHS con fecha 25 de diciembre de 2019 y se derivó a COMPIN para evaluación de secuelas.

b) Que, conforme con su informe de antecedentes médicos, allegado mediante oficio de ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, se tiene por efectivo que el demandante obtuvo el alta médica de parte de dicha mutualidad el día 29 de diciembre de 2019.

c) Por otra parte, de la misma ficha clínica aparece que el actor fue derivado el 7 de marzo de 2019 a evaluación de psiquiatra por un trastorno de adaptación en observación, del cual no se tiene más antecedentes.

A modo de resumen, los diagnósticos y secuelas del accidente del actor consisten en la luxofractura del lisfranc del pie izquierdo, lo cual implicó que debió ser sometido a 2 cirugías y seguir los correlativos



tratamientos de rehabilitación de su marcha, los que se prolongaron por más de un año con 3 meses en total y dejaron cicatrices en su pie. En tal sentido, la lesiones generaron al demandante incapacidades durante el periodo que va de septiembre 2018 a diciembre de 2019, las que –según refirieron sus testigos– le impedían hacer esfuerzos simples como levantar cosas, correr y estar parado o caminar por mucho rato, tropezándose con frecuencia y debiendo permanecer la mayor parte del tiempo sentado. Dichos testimonios no refieren padecimientos de índole sicológica del actor, siendo el único elemento en tal sentido la sesión con psiquiatra que éste tuvo con fecha 20 de marzo de 2019, oportunidad en que refirió sentirse molesto e irritable por haber sido excluido de los beneficios del seguro de accidentes del trabajo por ACHS y no haber recibido apoyo de la empresa, todo lo cual afectó su recuperación.

DÉCIMO: Que la prueba antes mencionada reviste características de suficiencia, consistencia con la demás prueba rendida en juicio y verosimilitud respecto a que se derivan del accidente sufrido por el actor, por lo que se habrá de acoger la demanda de indemnización de perjuicios por el daño moral experimentado a consecuencia de dicho accidente, el que de manera evidente importó un trastorno relevante en su vida cotidiana, con diversas cirugías y tratamientos para una rehabilitación que se extendió por más de un año, reposos médicos extendidos y sufriendo de dolores al intentar recuperar su funcionalidad, todo lo cual le dejó cicatrices en la zona que fue intervenida quirúrgicamente.

Que otra cosa es el *quantum* de la indemnización por daño moral, el cual ciertamente no es compensatorio, desde que no es objetivamente dimensionable, sino que debe ser sólo reparatorio, por lo que debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del mal sufrido. En esta línea, el demandante rindió probanzas demostrando los pesares y disminuciones sufridos como consecuencia del accidente, los que –conforme con la prueba rendida– sólo se circunscribieron a los dolores y molestias físicas generadas por éste (perjuicio de sufrimiento), sin aportar evidencia suficiente respecto a las disminuciones que para la vida diaria del actor habrían generando sus secuelas (perjuicio de agrado). Finalmente, en cuanto al factor estético, únicamente se acreditó que el accidente se tradujo



en cicatrices en la zona intervenida quirúrgicamente, pues el uso de bota y bastones ortopédicos fue temporal.

En las anotadas circunstancias, la existencia del daño moral producto del accidente y su entidad se tornan evidentes, estimándose prudencialmente en la suma de \$15.000.000 (quince millones de pesos).

UNDÉCIMO: Que la parte actora solicitó le sea indemnizado el lucro cesante que le ha significado el accidente por \$40.000.000, fundado en las limitaciones físicas y psicológicas irreversibles con que lo ha dejado el accidente sufrido, lo cual disminuye sus posibilidades de encontrar un trabajo, sin explicar cómo llegó a dicha suma, aunque explícitamente señaló que ésta no correspondía a la proyección de la remuneración hasta su jubilación sino que a toda pérdida futura que representen los daños físicos y limitaciones por no poder realizar el trabajo que había sido su sustento hasta la fecha del accidente.

Que el lucro cesante es la ganancia que se haya dejado de obtener por consecuencia del hecho de que es responsable la empleadora y, en tal sentido, es una proyección siempre futura pero debe determinarse –según la asentada jurisprudencia– conforme con parámetros objetivos, a saber: la remuneración del trabajador, su grado de incapacidad, su edad al momento de la interposición de la demanda y la edad legal para pensionarse, todos los cuales permiten obtener un resultado. La certidumbre de la pérdida de ganancia lo da precisamente la declaración de incapacidad y tal como señala el Profesor Enrique Barros Bourie en su “Tratado de Responsabilidad Extracontractual” (Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 2006, página 237) *“lo que ocurrirá en el futuro rara vez tiene una certidumbre matemática, por lo que el derecho se contenta con un grado de certeza razonable, se exige que el daño futuro sea la prolongación natural de un estado de cosas”*, pero ello exige que dicha proyección de un estado de cosas se haga conforme con parámetros determinados y no por el mero capricho de la parte o del tribunal, quienes carecen de toda experticia para determinarlo.

Al efecto, la parte demandante renunció a someter su petición de lucro cesante a dicho esquema de cálculo, pese a que el actor cuenta con



una declaración de incapacidad, proponiendo un monto y sin expresar algún fundamento para determinarlo, lo cual no permite alcanzar el estándar de certeza que exige la indemnización del lucro cesante, por lo que lo solicitado como indemnización por dicho concepto deberá rechazarse.

El tribunal tampoco puede efectuar el cálculo ya que no se le ha otorgado competencia para ello, desde que el actor solicitó –en subsidio– que el tribunal lo determine prudencialmente, en justicia y equidad, lo cual contraviene el carácter cierto y determinado que tiene este tipo de indemnización. Por lo demás, acceder a la petición del lucro cesante con un fundamento diverso al proporcionado por el demandante en su libelo haría incurrir al tribunal en el vicio de *extra petita*.

DUODÉCIMO: Que la prueba ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica y el resto de las probanzas en nada alteran o desvirtúan las conclusiones a las que ha arribado el tribunal.

DÉCIMO TERCERO: Que no se condenará en costas a la demandada por no resultar completamente vencida, además de estimar que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1547, 1556 y 2329 del Código Civil; artículos 69 y 88 de la ley N° 16.744 y artículos 184, 420, 425, 456 y 459 del Código del Trabajo, se declara:

I. Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta por don MANUEL FILEMON PIZARRO BASCUR en contra de la demandada ELABORADORA DE ALIMENTOS FRUTALE LIMITADA y –en consecuencia– se la condena a pagar al actor la suma de \$15.000.000 (quince millones de pesos) por concepto de daño moral.

II. Que se rechaza en todo lo demás la acción intentada.

III. Que las sumas ordenadas pagar devengarán los **reajustes** que contempla el artículo 63 del Código del Trabajo, **más los intereses** corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el fallo hasta su pago efectivo.

IV. Que cada parte pague sus costas.



Ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT O-2918-2020.

RUC 20-4-0267192-1.

Dictada por Víctor Manuel Covarrubias Suárez, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



SCLYXDQHCW

A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>